

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 30 de agosto de 2022

MAGISTRADA PONENTE: PATRICIA FEUILLET PALOMARES

Medio de Control:	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Expediente:	76001-23-33-000-2018-01064-00
Demandante:	Hospital Universitario del Valle – Evaristo García ESE notificacionesjudiciales@huv.gov.co luisa.giraldo0502@gmail.com
Demandado:	Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC
Asunto	OBEDECER Y CUMPLIR REMITIR POR COMPETENCIA

Auto interlocutorio

ASUNTO PARA DECIDIR:

El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”, C.P. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en providencia del 12 de agosto de 2021 (folios 72-75), revocó el auto proferido por esta Corporación el 23 de julio de 2020. Conforme con lo anterior, en la parte resolutive de esta providencia se dispondrá a obedecer y cumplir lo anterior y se procederá a resolver sobre la admisibilidad de la presente demanda.

ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del CPACA, el Hospital Universitario del Valle Evaristo García ESE, en adelante HUV, presentó demanda contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, y pretende la nulidad de los siguientes actos administrativos:

- Resolución No. 20172010058505 del 21 de septiembre de 2017 , expedido por la CNSC.
- Resolución No. 20172010058555 del 21 de septiembre de 2017 , expedido por la CNSC.
- Resolución No. 20172010058565 del 21 de septiembre de 2017 , expedido por la CNSC.
- Resolución No. 20172010058575 del 21 de septiembre de 2017 , expedido por la CNSC.
- Resolución No. 20172010058585 del 21 de septiembre de 2017 , expedido por la CNSC.
- Resolución No. 20172010058595 del 21 de septiembre de 2017 , expedido por la CNSC
- Resolución No. 20172010058605 del 21 de septiembre de 2017 , expedido por la CNSC.
- Resolución No. 20172010058615 del 21 de septiembre de 2017, expedido por la CNSC..
- Resolución No. 20172010061795 del 9 de octubre de 2017, expedido por la CNSC.

Los anteriores actos administrativos rechazaron, por improcedente, el recurso de apelación que presentó la gerente del HUV, en contra de nueve resoluciones proferidas por la CNSC que decidieron la reincorporación de los empleados de carrera



administrativa que, por la reestructuración de la planta de personal, fueron desvinculados de la entidad hospitalaria.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) ordenar a la demandada que profiera una decisión de fondo en respuesta a los recursos interpuestos contra esas resoluciones, y ii) condenar a la demandada a pagar los valores que ha asumido el HUV por los empleados incorporados y los que se causen hasta el día en que se pronuncie de fondo.

Corresponde al Despacho pronunciarse sobre la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, a fin de verificar si cumple los requisitos legales para ser admitida.

1. DE LA JURISDICCIÓN

Conforme al artículo 104 del CPACA la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

2. DE LA COMPETENCIA

2.1. Factor funcional

En cuanto a la competencia funcional el CPACA, en su versión original, indica:

"ARTICULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes."

En el asunto concreto, se pretende la nulidad de los actos administrativos que resolvieron unas reclamaciones laborales y se dispuso reconocer el derecho de incorporación al empleo público en carrera administrativa a determinados funcionarios del HUV a quienes se les suprimió el cargo, por lo que resulta ser de carácter laboral y no proviene de un contrato de trabajo.

2.2. Factor territorial

En cuanto a la competencia territorial el CPACA señala:

"ARTÍCULO 156. COMPETENCIA POR RAZÓN DEL TERRITORIO. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:

(...)

3. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios."

Se observa que el lugar donde se encuentran prestando los servicios las personas cuya reincorporación se demanda, el HUV, se encuentra ubicado en la ciudad de Cali, por lo que esta Corporación es competente por el factor territorial para conocer del presente asunto.

2.3 Factor Cuantía



Respecto a la estimación de la cuantía, el Consejo de Estado¹ ha recordado que la fijación de los perjuicios causados tiene como finalidad determinar quién es el juez competente para conocer de un determinado proceso. Sobre el particular se ha expresado que:

“Cuando en la demanda se formulen varias pretensiones, la cuantía del proceso se determinará por el monto de la pretensión mayor formulada por cada uno de los demandantes. Así, se tiene que los perjuicios por daño moral, daño emergente y lucro cesante son pretensiones autónomas entre sí y respecto de cada demandante, por lo tanto no se pueden sumar para efectos de determinar la cuantía de las pretensiones formuladas por cada uno de ellos”². (subrayas por fuera de texto).

Al momento de estudiar la competencia funcional, se debe analizar de manera individual cada una de las pretensiones de aquellos que se consideran lesionados, para así determinar si es dable admitir o no la demanda.

El numeral 2 del artículo 155 del CPACA, en su versión original, establece lo siguiente:

“Art. 155. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia.

Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2º. *De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.*

Ahora bien, el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011 establece:

“ARTÍCULO 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. *Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, **según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda**, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.*

*Para los efectos aquí contemplados, **cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor**.*

En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.” (Subrayas y negrillas por fuera de texto)

¹ Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección A, C.P. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, providencia 19 de febrero de 2019, Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00197-00(62962).

² Consejo de Estado, auto de 28 de marzo de 2007, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. En igual sentido se ha pronunciado el Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E) en auto de 2 de mayo de 2016.



En el presente asunto, la parte demandante razon3 la cuantía por los 52 empleados con derechos de carrera administrativa, por lo que tuvo que desplazar a los empleados provisionales que ocupaban dichos cargos a una planta transitoria por la condici3n especial de protecci3n que tenía, raz3n por la que, para estimar la cuantía, sum3 los pagos realizados a los empleados. Sin embargo, con los anexos de la demanda aport3 tabla en Excel en la que especific3 los pagos realizados a cada uno de la siguiente manera (nomina marzo 2018):

30. RESOLUCION NO 20182010001493	13/02/2018 3:04 p. m.	Documento Adob...	1.762 KB
31. ACUERDO No 036 de 2017	18/01/2018 9:23 a. m.	Documento Adob...	1.315 KB
32. Resolucion No. 0300 de 2018	8/02/2018 2:00 p. m.	Documento Adob...	3.785 KB
34. Nomina de incorporados Dic-mar 2018	11/04/2018 5:07 p. m.	Hoja de c3lculo d...	1.237 KB

De esa tabla se extrajo la siguiente informaci3n, para determinar la pretensi3n mayor:

EMPLEADO INCORPORADO	VALOR DEVENGADO MENSUALMENTE
GUAZA MEJIA MELBA RUTH	3.721.392
LOAIZA LIDY	8.663.570
SERNA SOTO LUZ MARINA	8.663.570
AGUDELO VALDEZ MERCEDES	3.462.654
ALVARADO RIOS MARTHA CECILIA	3.676.130
ARROYO CASTILLO EVENIS	2.539.831
ASTUDILLO ARTUNDUAGA MARIA EUGENIA	1.786.107
BARRERO BARRIOS JULIO CESAR	3.605.391
BAUTISTA DELGADO MONICA ELIZABETH	3.809.171
BONILLA ARIZA LUZ MERY	6.023.109
CAMPO GARCIA MARIELA	3.695.427
CASTRO QUINTERO MARITZA	3.741.733
CORREA PEREZ MARIA TERESA	1.786.107
DINAS SANCHEZ ALBA JENIS	2.977.262
ESCOBAR VELASCO NUBIA ESTELLA	3.790.934
FLOREZ RIVERA GLORIA	1.786.107
GALLEGO AGUIRRE LADY	5.754.576
GARCIA CAICEDO MARIA EUGENIA	6.152.911
GONZALEZ MANUNGA MARITZA	2.954.936
GONZALEZ ULABARRI LEYDY YOHANNA	3.724.368
HERNANDEZ ACEVEDO LEYDI CECILIA	3.741.733
HERNANDEZ ALCALA GINA MARCELA	3.745.728
HERRERA VALENCIA MARIA AMPARO	2.554.301
JOAQUI ORDONEZ NAYDU	3.750.416
LARGO ARISTIZABAL NORMA LUCIA	3.453.971
MEDINA CONDE EDITH	3.459.760
MINA SOLARTE MARIELA	3.793.828
MONTANO OROZCO NORALBA	2.649.809
MORALES COLORADO MARLENI AMPARO	3.661.524

³ Salario mínimo para el año 2018 \$781.242 x 50 =39.062.100



Por lo anterior, debe aplicarse el numeral 2 del artículo 155 del CPACA y la competencia para conocer en primera instancia el presente asunto radica en los juzgados administrativos.

En cumplimiento al artículo 168⁴ del CPACA, se ordenará remitir el expediente por competencia a los juzgados administrativos de Cali (Reparto), que deberán observar el inciso tercero del artículo 139⁵ del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306⁶ del CPACA.

En consecuencia, se

R E S U E L V E:

PRIMERO: OBEDECER Y CUMPLIR lo ordenado en la providencia del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”, C.P. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, del 12 de agosto de 2021, que revocó el auto proferido por esta Corporación el 23 de julio de 2020.

SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE COMPETENCIA debido a la cuantía para tramitar el presente proceso, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

TERCERO: REMITIR por competencia en razón a la cuantía a los juzgados administrativos de Cali (Reparto) las presentes diligencias.

CUARTO: Por Secretaría de esta Corporación realizar las anotaciones pertinentes en la plataforma SAMAI:

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

**Firmado electrónicamente por Samai
PATRICIA FEUILLET PALOMARES
Magistrada**

⁴ ARTÍCULO 168. FALTA DE JURISDICCIÓN O DE COMPETENCIA. En caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el Juez ordenará remitir el expediente al competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión

⁵ ARTÍCULO 139. TRÁMITE. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso.

El juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.

El juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales.

El juez o tribunal al que corresponda, resolverá de plano el conflicto y en el mismo auto ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos.

Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada.

La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces.(subrayas fuera de texto).

⁶ ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Proyecto: LQ